

EL POLVORÍN DE LA ZONA NORTE

GUSTAVO CASTRO SOTO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 30 DE JULIO DE 1997

Si la reanudación del diálogo de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal tiene que pasar por una solución al problema de la Zona Norte del estado de Chiapas, ni ésta ni aquella, asoman luces de solución a corto o mediano plazo.

Al momento del regreso de los desplazados que estuvieron 87 días en plantón frente al palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez hace poco más de 10 días (ver Boletín anterior), son asesinados dos líderes del grupo paramilitar "Desarrollo, Paz y Justicia". Desde entonces hasta la fecha, dos campesinos murieron en Chilón, otros dos del grupo paramilitar fueron asesinados, otros más en el municipio de Sabanilla, etc. Los muertos, asesinatos, secuestros, emboscadas, etc., son endosados a dos actores diferentes en la región:

1.- Al grupo paramilitar "Desarrollo, Paz y Justicia": protegido, financiado, apoyado y entrenado militarmente por el ejército mexicano, así como por parte de la Seguridad Pública del estado, diputados del partido oficial (PRI) como es el caso del diputado local Samuel Sánchez Sánchez, señalado como líder y asesor del mismo; por las autoridades municipales priístas que ofrecen recursos económicos y políticos para su protección, etc. Está compuesto también por indígenas choles y liderados por maestros indígenas quienes reciben pagos como tales pero para realizar el trabajo y la dirección de este grupo paramilitar. El gobierno federal como estatal, como sucede en otras zonas del estado, dentro de la guerra de baja intensidad, apoya con recursos exclusivos para "proyectos de desarrollo", fondos que han sido denunciados como recursos desviados para la compra de armamentos, uniformes, contribuciones económicas al grupo paramilitar, etc. Este grupo paramilitar, que incluyó en su nombre "Desarrollo...A.C" posteriormente, para poder acceder a recursos oficiales, ha sufrido una división interna muy fuerte. Al parecer, las razones de esta división han sido, por un lado, los intereses económicos en pugna, los financiamientos recibidos, la corrupción interna y favoritismos entre las diversas comunidades; por otro lado, la presión que se ejerce sobre los agremiados y los desacuerdos que generan sus políticas de acción y violencia en las comunidades: asesinatos, emboscadas, torturas, etc. Acciones que han "justificado" la presencia de la policía de Seguridad Pública en las comunidades y que ahora son difíciles de expulsar. Es este grupo paramilitar que controla los caminos, veredas y solo permite el paso al ejército y seguridad pública, así como a los mismos priístas.

En esta zona no tienen acceso los periodistas, los organismos de derechos humanos, observadores extranjeros, los partidos de oposición, etc. Desarrollo, Paz y Justicia presenta diversas caras y facetas: maestros, priístas (PRI), evangélicos en su mayoría y gubernamentales.

2.- A los indígenas de la Sociedad Civil: este es el otro actor enfrentado al grupo paramilitar. Del mismo modo, indígenas choles, identificados también con varias caras: "sociedad civil organizada", perredistas (PRD), zapatistas, bases de apoyo del EZLN, catequistas, católicos, no gubernamentales. En su caso son los que han puesto la mayoría de los presos, los desplazados (más de 5 mil personas), los muertos, los desalojados, las víctimas de las emboscadas, la exclusión de los proyectos de desarrollo con fondos gubernamentales (según la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOC- Chiapas es el estado con más asignación de recursos en el país, con una suma total para el presente año de \$ 1,200 millones de pesos), los despojos, las casas quemadas, los torturados, etc. También han respondido a la agresión causando algunas muertes a los paramilitares.

Las propuestas de distensión y reconciliación se muestran lejos de ser operativizadas. Para arrancar este proceso se proponen Mesas de negociación. Para ello, la COCOPA mantiene su propuesta de generar primero acuerdos generales, marcos, de carácter regional donde se puedan contextualizar los acuerdos intercomunitarios y con el fin de evitar otros brotes de violencia. Por su lado, el gobierno del estado de Chiapas propone solo acuerdos intercomunitarios. Además, la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas, compuesto por obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), han anunciado próximamente una propuesta de reconciliación para la zona. Ya que el gobierno ha sido indicado como responsable de la violencia en la región y, por ende se le excluiría como mediadores del conflicto, el gobierno ha desatado una campaña de desprestigio contra la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, contra el obispo Don Samuel Ruiz, contra los párrocos, catequistas y organizaciones campesinas como los responsables de la violencia, muertes, asesinatos, etc. De tal modo que, el obispo Samuel Ruiz u otra instancia de carácter eclesial, saliera del escenario de las mediaciones. Lo que parecía un conflicto entre priístas y perredistas, luego entre paramilitares y bases zapatistas, el gobierno hace ahora énfasis en un conflicto diferente que se recorre al frente entre "Desarrollo, Paz y Justicia, A.C." y la iglesia católica y "sus grupos paramilitares". Los signos gubernamentales para favorecer una solución de paz también se extrañan. Con los últimos acontecimientos violentos se fortalecen los patrullajes de la seguridad pública mientras permanece una situación de ingobernabilidad y un territorio controlado por el ejército mexicano. En los últimos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe donde afirma que en el último año, el gobierno de Chiapas, junto con los de Veracruz y Guerrero, han sido los estados con más recomendaciones por violación a los derechos humanos.

EL DIÁLOGO DE SAN ANDRÉS

Mientras el presidente Zedillo exhorta al EZLN a deponer su "rebeldía" retórica, el delegado gubernamental para el diálogo, Pedro Joaquín Coldwell, propone que los acuerdos de la Mesa 1 y la propuesta de ley de la COCOPA sea nuevamente discutida y consensuada por diversos actores. La COCOPA por su lado ha manifestado que su propuesta no la incluirá en la presente legislatura por falta de consenso entre sus miembros sino hasta que se instale la nueva Cámara, en septiembre del presente año. También reprueban las condiciones en las que se encuentra la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar que ha sido objeto de robos y abandono por parte de las autoridades. Diversos actores políticos del país continúan haciendo eco de la presión política hacia el

EZLN para que se convierta en una fuerza política electoral para sumarse a la "fiesta democrática" que vive el país.

Mientras el EZLN se mantiene en un cerco político y militar, dos de sus representantes viajan a España al II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. El EZLN no solamente rompe el cerco estatal y nacional sino el internacional con sus delegados zapatistas. Por otro lado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha manifestado que no llevará operaciones militares en el estado de Chiapas. También, el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), que se le vincula más con el EPR, manifiesta que lleva un saldo de 134 detenidos, 194 presos, 37 muertos y 37 desaparecidos.

LA AGENDA POLÍTICA

De aquí a lo que resta del año, los acontecimientos pasarán por fechas importantes: 3 de agosto, clausura del II Encuentro Intercontinental en España; 23 de agosto, resolución sobre las apelaciones electorales; 1o. de septiembre: integración del nuevo Congreso de la Unión y el Informe Presidencial; 15 de septiembre, integración de la Asamblea de Legisladores del Distrito Federal; 12 de octubre, Congreso Nacional Indígena, festejos y movilizaciones nacionales; 5 de diciembre, toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del DF.

Nota: para ver un panorama de cómo ha evolucionado el conflicto en esta región, recomendamos leer los anteriores boletines bajo el título "Zona Norte".